



Ricardo Garrone, un «ciudadano por encima de toda sospecha».

aceptación de los aumentos de precio mediante una hábil campaña de prensa. El asunto cobra a partir de ese momento proporciones nacionales.

Convencidos de haber descubierto el pastel de la corrupción, y sin osar fiarse de nadie, los investigadores se convierten casi en personajes de *western*: uno de los jueces se dirige solo a Génova con los documentos más valiosos en un tren especial, que se detiene excepcionalmente a la entrada de la ciudad. Dos coroneles de la Guardia de Finanzas dan escolta a un furgón que transporta el resto de los documentos, así como cintas grabadas con conversaciones telefónicas. Al llegar a Génova, a primeras horas de la mañana, los documentos son fotocopiados. Cada una de las cinco fotocopias que se hacen de los documentos se oculta en un lugar distinto y se somete a la custodia de agentes armados; de las cintas magnéticas se hacen también nuevas copias, que se guardan en lugar seguro.

¿Por qué todas estas preocupaciones? Porque los dos jueces conocen bien la habilidad de ciertos magistrados italianos para disimular pruebas cuando éstas pueden comprometer a los poderosos. Al mismo tiempo, los jueces emiten seis «comunicaciones judiciales», relacionadas con seis grandes petroleros, entre ellos, Garrone y Cazzaniga.

Tercera fase de la investigación, la más escandalosa de todas: la orden de arresto lanzada el sábado 9 de febrero contra Cazzaniga. En los documentos bajo secuestro se demues-

tra efectivamente que en 1971, cuando la compañía nacional de electricidad Enel vacilaba entre un programa de inversiones nucleares y otro de centrales termoeléctricas, la Unión Petrolera, presidida por Cazzaniga, entregó más de mil millones de liras a los miembros del Consejo de Administración del Enel —compuesto por representantes de los partidos políticos en el poder— para que se decidiesen por el programa termoeléctrico. Porque este tipo de programa exige un gran consumo de gas-oil. A su vez, los miembros del Consejo hicieron entrega de ciertas subvenciones a su partido. Ese escándalo significó el paso del almacenamiento abusivo de petróleo a la corrupción a gran escala.

¡Menudo trabajo para los dos jueces, que se han hecho inmediatamente populares en Italia! Se les llama amablemente «jueces de asalto», y cada uno de ellos va y viene entre Génova y Roma como un justiciero del Far West: Mario Almerighi, treinta y cuatro años, cabeza a lo Trudeau, trabaja desde hace un año en Génova; Adriano Sansa, treinta y tres años, católico practicante acostumbrado a los asuntos difíciles. Frente a ellos, la casta de los traficantes de petróleo, la red de las complicidades políticas, el peso de la jerarquía judicial, que trata de arrebatarles las piezas esenciales del «dossier» para irlos enterrando poco a poco.

Muchos italianos piensan que es el suyo un país idóneo para la aventura política. Otros se niegan a creerlo, pues «en Italia —dicen— todo estalla un minuto antes de que sea demasiado tarde». En apoyo de sus tesis: las fuerzas sanas que representan la joven magistratura y ciertas capas de funcionarios, y especialmente, como escribe el «Manifesto» del 12 de febrero, «un movimiento obrero extraordinario por su amplitud y por su madurez». En cualquier caso, los meses que vienen serán decisivos; la gran prueba del referéndum en torno al divorcio está prevista para dentro de sesenta días. ■ MARCELLE PADOVANI.

